ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MARTES 9 DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

1

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
566/2004	<p data-bbox="375 755 1279 841">LISTA OFICIAL ORDINARIA VEINTINUEVE DE 2007.</p> <p data-bbox="375 935 1279 1300">AMPARO EN REVISIÓN promovido por Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero y coagraviados, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación del artículo 31, fracción VIII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero de 2002.</p> <p data-bbox="375 1346 1279 1440">(PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO)</p>	<p data-bbox="1284 935 1505 981">3 A 27</p> <p data-bbox="1284 1026 1505 1069">APLAZADO</p>

ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MARTES 9 DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

2

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
	<p>LISTA OFICIAL ORDINARIA TREINTA Y TRES DE 2007.</p>	
59/2006	<p>CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL promovida por el Municipio de Coxcatlán, Estado de San Luis Potosí en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, demandando la invalidez de los artículos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 28-B, 72-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, así como de los artículos 3º, fracciones XV y XVI, 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 13, 64 y 65, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, contenidos en el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la normatividad mencionada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006.</p> <p>(PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA)</p>	<p>28 A 56. EN LISTA.</p>

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL EN PLENO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, CELEBRADA EL MARTES 9 DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.

A S I S T E N C I A:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SEÑORES MINISTROS:

SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

OLGA MA. SÁNCHEZ CORDERO.

JUAN N. SILVA MEZA.

AUSENTE: SEÑOR MINISTRO:

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ.

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:35 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE ORTIZ MAYAGOITIA.- Se abre la sesión.

Señor secretario, sírvase dar cuenta con los asuntos del día.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ.- Sí señor, con mucho gusto.

Se somete a la consideración de los señores ministros el proyecto del acta relativa a la sesión pública número 101, ordinaria, celebrada ayer.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE.- ¿Observaciones de los señores ministros al acta?

Señor secretario, en la página dieciocho, párrafo segundo, dice mi nombre todavía como presidente y estaba ya en substitución de mi persona el decano.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Sí, se corrige con mucho gusto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE.- Con la modificación que he indicado, consulto a los señores ministros en votación económica la aprobación del acta.

(VOTACIÓN FAVORABLE)

ESTÁ APROBADA EL ACTA.

Señor secretario, sírvase dar cuenta.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.-
Sí señor, muchas gracias.

AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 566/2004. PROMOVIDO POR BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO Y COAGRAVIADOS, CONTRA ACTOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y OTRAS AUTORIDADES, CONSISTENTES EN LA EXPEDICIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1° DE ENERO DE 2002.

La ponencia es del señor ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y en ella se propone:

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA.

SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; INVEX, CASA DE BOLSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; INVEX GRUPO FINANCIERO E INVEX SERVICIOS CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES Y POR LOS ACTOS PRECISADOS EN EL RESULTANDO PRIMERO DE ESTA RESOLUCIÓN.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE.- Señores ministros, el día de ayer se dio cuenta por primera vez con este asunto, quedó presentado por el señor ministro ponente, y ahora me han pedido la palabra el señor ministro Góngora Pimentel y a continuación el señor ministro Cossío.

Sírvase, señor ministro Góngora.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL.- Gracias señor presidente.

La materia del asunto: ¿debe negarse el amparo a la parte quejosa?, tema de fondo: inconstitucionalidad del artículo 31, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos. La prohibición para deducir intereses por préstamos tomados para fincar préstamos a empleados, en los que no se estipula pago de intereses.

Problemas jurídicos y tratamiento que se da.- El proyecto propone negar el amparo, al considerar que el precepto reclamado no infringe las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias. Lo anterior en virtud de que –dice el proyecto- el artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, fue derogado tácitamente por el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que sí permite el pago de intereses a préstamos otorgados a los trabajadores, sin que obste que dicho numeral haya sido declarado inconstitucional por esta Suprema Corte. Tema de proporcionalidad.

Además de que el Legislador creo categorías distintas de contribuyentes, a las que les otorga tratamiento similar. Tema de equidad.

Con todo respeto, estimo que aun cuando pudiera sostenerse la negativa que se propone, tendría que ser con otras consideraciones, como lo explico a continuación.

Como se advierte de la sentencia del juez de Distrito, la quejosa, Grupo Financiero, promovió el juicio de amparo indirecto con motivo de la presentación de sus declaraciones anuales del ejercicio de dos mil dos, de las que, junto con el dictamen pericial, se desprende que, cito: Pagaron intereses por los recursos que obtuvieron en

préstamo que destinaron a otorgar créditos a sus trabajadores, en los cuales no se pactó el pago de intereses, y para determinar su utilidad fiscal, no consideraron como deducibles las cantidades que pagaron por concepto de intereses, en términos del artículo 31, fracción VIII de la Ley de Impuesto sobre la Renta. El juez federal declaró infundados los conceptos de violación, ya que señaló: El pago de los intereses por préstamos tomados por la parte quejosa, no es un gasto deducible, puesto que no es estrictamente indispensable para sus fines, proporcionalidad; y no es inequitativo, pues rige para todos los contribuyentes por igual.

Interpuesto el recurso de revisión, el tribunal Colegiado se declaró incompetente y envió el asunto a esta Suprema Corte. En su escrito, la recurrente nuevamente se duele de la infracción de sus garantías tributarias, aduciendo respecto a la proporcionalidad, que lo dicho por el juez, tocante a la prohibición de deducir, es un tema de legalidad y no de constitucionalidad, pero que además el pago de intereses, de acuerdo con los artículos 29, fracción IX, y 31, fracción VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera como estrictamente indispensable, y que al estar destinado a sus trabajadores, cumple con la otra exigencia de ser para los fines del negocio, a lo cual se suma que no existe ningún fin extrafiscal que justifique la desproporcionalidad, tema de proporcionalidad, en cuanto a la equidad tributaria. La recurrente afirma al respecto que el hecho de que el artículo reclamado no sea privativo, no implica que no viole la referida garantía de equidad tributaria. También señala que el juez confundió la generalidad de la norma con la equidad, y no atiende que la inequidad resulta porque se trata igual a desiguales. Así debe estudiarse el argumento hecho valer a fojas 43 a 49 de la demanda.

Tales elementos ponen de manifiesto la necesidad de que, en primer término, se examinen las infracciones formales que aduce la

recurrente, esto es, si es verdad que el juez resolvió el tema de proporcionalidad con argumentos de legalidad y no de constitucionalidad; y si es cierto que no examinó el punto de equidad, como lo planteó, y que, por ende, debe nuevamente analizarse el argumento hecho valer a fojas 43 a 49 de la demanda de garantías. Así habría que darles el sentido correcto a los agravios hechos valer y determinar si es fundado que el juez no examinó los conceptos de violación que se le plantearon.

En segundo lugar, parece que el tema de proporcionalidad se sustenta en la contradicción entre dos normas secundarias, a saber: El artículo 31, fracción VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo. Si así fuera, el planteamiento en principio no sería de constitucionalidad, sino de legalidad, aun cuando finalmente subsistiría el argumento de que el precepto tributario infringe la citada garantía al no permitirle a la quejosa deducir el pago de intereses por préstamos tomados para financiar a sus trabajadores; lo que podrían entenderse en relación directa con el 31, fracción IV, constitucional.

En tercer lugar, estimo que el tema de proporcionalidad no puede resolverse como se hace en el proyecto, con base en la derogación de normas, puesto que no parece correcta la premisa respecto a la existencia de un conflicto entre el artículo 78-A, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el artículo 111, de la Ley Federal del Trabajo; y que el primero deroga al segundo, puesto que se trata de ordenamientos distintos, máxime que, como incluso se reconoce en el proyecto, el artículo 78-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues ya fue declarada inconstitucional por esta Suprema Corte.

En cuanto al tema de equidad, estoy básicamente de acuerdo con el tratamiento dado en el proyecto.

Una propuesta de solución, con todo respeto.

Ante todo, cabría considerar si en la especie se está en presencia de uno de aquellos casos en que la constitucionalidad del planteamiento amerita el análisis de legalidad de la norma en cuestión; así es que podría comenzarse el estudio, examinando la disposición de que se trata.

Segundo.- La deducción de que se trata, por regla general está autorizada en el artículo 29, fracción IX; empero, sujeta a las condiciones de la fracción VIII, del artículo 31 –que es el cuestionado en este caso-; entonces, debería determinarse si el pago de intereses por capitales tomados en préstamos para financiar a los trabajadores sin costo alguno, es un gasto estrictamente indispensable; y si está destinado a los fines del negocio, que son las dos exigencias fundamentales que la Ley de la Materia establece para deducir el gasto que representa el pago de intereses.

El caso específico –número tres-, se ajusta a la regla general prevista, entre otras situaciones, en la fracción VIII, del artículo 31, de no deducibilidad de los intereses pagados por el contribuyente por capitales tomados en préstamo para financiar a sus trabajadores sin cobro de intereses; lo que pudiera revelar la voluntad del Legislador de que cuando un contribuyente se vea obligado a efectuar préstamos a terceros, debe cobrarle por lo menos una tasa de interés equivalente a la que a su vez él está pagando a sus acreedores; pues de otra manera no se justifica el porqué de una operación en esos términos, excepto cuando se trate de préstamos que se efectúen a trabajadores de la empresa.

Cuatro.- Dicho caso de excepción se establece en el último párrafo del artículo 18, del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, que dice, -cito-: “Las limitaciones para la deducibilidad de los intereses a que se refiere la disposición legal que se reglamenta, no se aplicarán a los préstamos que el contribuyente haga a sus trabajadores, siempre que éstos se otorguen conforme al contrato colectivo o condiciones generales de trabajo correspondientes” –fin de la cita-

La disposición está vinculada estrechamente con el artículo 111, de la Ley Federal del Trabajo, que dispone, -cito-: “Las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán intereses” –fin de la cita-

Conforme a dichas disposiciones, bien podría concluirse que cuando la obligación a cargo del patrón de efectuar préstamos a sus trabajadores se establezca en el contrato de trabajo o en las condiciones generales de trabajo, ello le dará a dichos préstamos el carácter de gastos o erogaciones indispensables para llevar a cabo la actividad empresarial del contribuyente, lo que traerá como lógica consecuencia que podrán ser deducibles los intereses que pague la empresa a sus acreedores;

Sin embargo, cuando los préstamos a los trabajadores sin pago de intereses no se sustenten en el contrato de trabajo o en las condiciones generales de trabajo, los intereses que por su parte pague el contribuyente no serán deducibles en la proporción en que los capitales tomados en préstamos se utilicen para financiar a trabajadores.

Cinco.- Lo expuesto podría conducir a la conclusión de que en el caso, parece no darse el problema planteado, puesto que si la quejosa demostró estar en el supuesto de excepción, no les serían aplicables las reglas examinadas, pero si entra en la regla general, lógicamente no serán deducibles los intereses que cubrió por el financiamiento, al no considerarse como gastos estrictamente

indispensables y por no estar destinados a los fines del negocio, lo que, además no puede implicar que la norma infrinja el principio de proporcionalidad tributaria, habida cuenta que no puede estimarse violentado tal valor con conductas no autorizadas por la ley impositiva.

Seis.- Estimo, de así considerarlo, que sería conveniente hacer referencia al proceso legislativo si es que hay elementos que ilustren el punto, con todo respeto señor ministro es una serie de sugerencias que propongo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Muchas gracias señor presidente. Voy a permitirme leer un documento en el cual trato de explicar las razones por las que voy a votar en principio en contra del proyecto, posiblemente después en el debate pudiera haber algún argumento, pero hasta en este momento mi convicción es en el sentido que acabo de mencionar. No comparto la posición del proyecto porque el estudio de proporcionalidad tributaria, se basa en consideraciones que otorgan efectos equivocados al análisis conjunto de los artículos 111 de la Ley Federal del Trabajo, 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, texto vigente hasta 2001 y 31, fracción VIII de la propia Ley, texto vigente en 2002, la solución postulada no me parece adecuada y por ende no se cuenta con una propuesta que permita analizar la constitucionalidad de dicha disposición a la luz del planteamiento formulado por la parte quejosa, a continuación trato de explicar estos dos aspectos.

Primero.- En torno a la derogación tácita del artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, debemos partir de la premisa consistente en que el planteamiento de la quejosa sostiene que la limitante de la deducción de intereses pagados es un factor dependiente de la tasa de interés pactada en los créditos que se hubieran otorgado,

señalando que dado que había otorgado créditos a sus trabajadores en los cuales no podrían pactarse intereses por disposición del artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, ello implicaría una limitante en la deducción de los intereses pagados por los capitales tomados en préstamos, respecto al monto proporcional de las cantidades prestadas a los trabajadores, en el proyecto se pretende acreditar que el hecho de no pactar intereses en los créditos otorgados a los trabajadores, es una circunstancia eventual que depende del caso particular y que obedece a la voluntad de las propias quejas, mismas que por ende no es idónea para reclamar la constitucionalidad de una disposición general, pues el artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, habría sido derogado tácitamente, se dice en el proyecto, por el diverso artículo 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, según su texto vigente hasta 2001, sin que sea óbice a lo anterior que dicho ordenamiento hubiere sido abrogado, pues los efectos derogatorios de dicha disposición ya se habrían materializado con independencia de su posterior desaparición. El problema que se aprecia deriva de una indebida atribución de efectos derogatorios al artículo 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuando en realidad dicha disposición únicamente establece efectos fiscales a lo preceptuado en la legislación laboral; en efecto, a mi juicio la disposición tributaria no tuvo el propósito de derogar la prohibición de pactar intereses en los créditos otorgados por el patrón a sus trabajadores, sino que estableció la tasa de interés con base en la cual se cuantificaría el ingreso por servicios que para efectos fiscales correspondería a los trabajadores en caso de obtener un crédito por parte del empleador, caso en el cual se entiende, no existiría interés a cargo, la legislación tributaria entiende que el trabajador bien puede obtener créditos de su empleador o de un tercero; en caso de acudir a un tercero, por ejemplo, a una institución bancaria, esta seguramente le cobraría intereses; en cambio si acude a su patrón, este último tiene prohibido pactar intereses; de lo cual desprende

que fiscalmente cuenta con un beneficio que es susceptible de ser gravado; lo anterior involucra lo que la doctrina denomina la autonomía calificadora del Legislador tributario, acogida por el derecho tributario federal, en el segundo párrafo del artículo 5º, del Código Fiscal de la Federación, mismo que dispone que a falta de norma fiscal expresa, supletoriamente se aplicarán las disposiciones del derecho federal común, siempre que su aplicación no sea contraria a la naturaleza económica de las normas fiscales.

En efecto, en caso de que la norma fiscal defina una institución previamente definida por el derecho civil u otra rama del derecho, deberá estarse a lo que establezca expresamente el derecho tributario; en cambio, si este, por cualquier motivo no define o regula expresamente una situación, debemos estar a lo dispuesto por el derecho federal común.

Es claro, que el derecho tributario puede acoger conceptos de derecho privado, a los cuales puede transformar; o bien, puede únicamente reenviar a la rama del derecho de que se trata, conservando las características que éste les hubiere otorgado.

En caso de una institución particular; de que una institución particular se incorpore al derecho tributario, queda desprovista del carácter que le hubiera correspondido originalmente, transformándose en una institución de derecho tributario.

Efectivamente, con tal incorporación, el instituto pierde toda función de tutela de un interés individual, para convertirse en un concepto que concurre a la tutela del interés del estado, a la obtención de medios necesarios para subvertir gastos públicos. Hay otros autores, pero en fin no les hago perder su tiempo en esto.

Dado que dicha autonomía es una potestad y no una obligación, se aprecia que lo establecido por el artículo 5º, del Código Fiscal de la Federación, debe entenderse en el sentido que si el derecho tributario ejerce la misma, calificando los conceptos que utiliza, deberá prevalecer el significado dado, pero si no requiere dotar de un concepto específico a una institución previamente regulada, el derecho tributario podrá dotar el contenido dado por la rama de origen, para seguir usando estas metáforas tan comunes en nuestro orden jurídico.

En el caso concreto, considero que pierde relevancia el interés

tutelado por la disposición de derecho laboral; esto es, la prohibición de pactar intereses en los créditos otorgados por el empleador a los trabajadores, y que simplemente para efectos tributarios se asume, que no se cobra un interés; y que precisamente por ello, el trabajador cuenta con un beneficio equivalente al costo financiero, que no se ve obligado a soportar, beneficio este sobre el cual, el Legislador tributario establece un efecto propio para la materia fiscal, sin que ello implique que el patrón se encontraba legitimado para cobrar intereses a los trabajadores.

No hay derogación expresa ni tácita, únicamente se da el establecimiento de efectos fiscales, susceptibilidad de gravar el beneficio equivalente a los intereses no cobrados por el patrón al trabajador, para el caso de que se materialice una situación regida en otro aspecto por el derecho laboral; esto es, la prohibición a cargo del empleador de pactar intereses en los préstamos otorgados a los trabajadores.

De esta forma, ni siquiera llega a tener relevancia el hecho de que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente como dijimos para el dos mil uno, haya formado parte de un

ordenamiento abrogado, pues dicho numeral no tuvo efectos derogatorios sobre lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo; y por ende, al día de hoy, subsiste la prohibición de pactar intereses en los créditos otorgados a los trabajadores, motivo por el cual, el reclamo efectuado, no depende de una circunstancia eventual e hipotética, ni obedece a la voluntad de las empresas quejasas de decidir no cobrar intereses a los trabajadores; dado que dicha circunstancia dimana de disposiciones legales obligatorias.

En tal virtud, el punto medular que sostiene la calificación de infundado, me parece, no es acertado; motivo por el cual, no coincido con la propuesta, encontrándome en posibilidad de pronunciarme sobre el fondo, en virtud de que dicha calificación no resulta adecuada; y por ende, el Tribunal Pleno carece de los elementos de un análisis, que permita emitir un pronunciamiento sobre el tema que se somete a nuestra consideración.

En cuanto al planteamiento del problema de proporcionalidad, al que también ya se hizo alusión por el señor ministro Góngora, y de esa forma lo trato yo también integralmente, voy a señalar lo siguiente: A mi entender, a fin de atender a la cuestión relacionada con la desproporcionalidad de la fracción VIII, del artículo 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, debe analizarse si la deducción de que se trata es de aquellos cuyo establecimiento puede exigirse al Legislador tributario o bien, si se trata de un concepto que más que reconocido es simplemente otorgado a los causantes.

Lo anterior, en razón de que de dicho estudio dependerá el rigor con que se analice el establecimiento de modalidades, requisitos e inclusive limitantes para la deducción de que se trate, tal como ha sido sostenido por este Alto Tribunal, según se desprende de la ejecutoria de contradicción de tesis 41/2005 y de diversas tesis aisladas, la principal de ellas de rubro:

"DEDUCCIONES. CRITERIO PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV CONSTITUCIONAL"; en la cual se sostiene, que entre las erogaciones a las que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta, podemos diferenciar dos tipos; el primero de ellos, las necesarias para generar el ingreso del contribuyente, las cuales deben ser reconocidas por el Legislador, sin que su autorización en la normatividad pueda equipararse con concesiones gratuitas, pues se trata de una exigencia del principio de proporcionalidad en materia tributaria en su implicación de salvaguardar que la capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos se identifique con la renta neta de los causantes, en este caso, el Legislador puede válidamente establecer requisitos y modalidades debiendo precisarse que dicha decisión del creador de la norma se encuentra sujeta al juicio de razonabilidad, a fin de que la misma no se implemente de tal manera que se afecten los derechos de los gobernados. La segunda y por otro lado, donde se contemplan erogaciones en las que no se observa la característica de ser necesarias e indispensables, las cuales no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas, pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso.

No obstante ello, el Legislador dijimos, puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte, pero sin tener obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones.

En mi opinión, los intereses a los que se refiere la fracción VIII del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, deben incluirse en el primer grupo como un gasto necesario e indispensable para la

generación del ingreso del contribuyente, pues se trata del costo inherente al financiamiento necesario para la consecución de los fines del causante.

En tal virtud, la limitación de la deducción de los intereses en los términos descritos por dicha disposición requiere de un respaldo que soporte el juicio de razonabilidad, análisis éste con el que no se cuenta al día de hoy para las consideraciones y la lógica misma del proyecto que se presenta.

A mi entender, es necesario que se replanté la propuesta a fin de que se analice si se trata de una deducción que pueda ser exigida en términos de la garantía de proporcionalidad tributaria, circunstancia ésta que estimo se actualice en el presente caso y asimismo sean aportados los elementos que permitan analizar finalmente si la limitante o condicionante que se establece se justifica constitucionalmente atendiendo al carácter razonable de la medida.

Y finalmente, en lo que hace al estudio de equidad tributaria relativo a la aducida violación a esta garantía, estimo que el mismo también resulta insuficientes, que el proyecto para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del problema planteado, pues se limita a señalar que el tratamiento es igual para todos aquellos que se encuentren en las condiciones descritas por la norma; sin embargo, el planteamiento de la quejosa hacía valer el trato inequitativo existente entre los que se ubican en la norma y aquéllos que se encuentran en una situación jurídica diversa; así, dicho argumento confronta la situación de dos grupos de causantes, tomando en cuenta que el reclamo parte de la premisa, de que se aduciría que ambos se encuentran en circunstancias iguales al pagar intereses como costo del financiamiento por capitales tomados en préstamo y no obstante ello, únicamente un grupo de causantes caen en el

ámbito de aplicación de la norma que limita la deducción de que se trata.

Por estas razones, creo que el proyecto también en esta parte debiera ser replanteado para permitirnos como Tribunal Pleno un pronunciamiento en estas mismas condiciones.

Es el señalamiento que tengo señor presidente, como lo digo respecto a los tres puntos, no es tanto que tenga una oposición formal, sino que no comparto el proyecto en razón de que a mi juicio hace falta responder y reconstituir algunas partes para estar en posibilidad de pronunciarnos sobre lo que rigurosamente se nos plantea.

Gracias señor presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE.- ¿Alguien más de los señores ministros?

Señor ministro Aguirre Anguiano.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO.- Gracias señor presidente. Voy a ser muy breve.

La cuestión, a mi juicio, está en lo que señalaba el ministro Góngora Pimentel, y la voy a concretar en esta pregunta. ¿Es gasto indispensable para la empresa el otorgar créditos sin intereses a sus trabajadores? o es simplemente una conveniencia, pues yo creo que la ley nos resuelve el problema. Nos dice: “cuando esto se pacta como condiciones generales de trabajo o en el Contrato Colectivo de Trabajo es deducible el interés que paga la empresa; el contribuyente para a su vez poder dar créditos blandos a sus trabajadores”, pero si esto no es así, no es deducible por no ser gasto indispensable para la concreción de su objeto social, entonces la separación es conveniencia e indispensabilidad. Yo no confundo lo que es conveniente con lo que es indispensable; no se

nos olvide que si confundimos esto, el que pecha con todo y baila con la más fea es el fisco y esto no es equitativo. Lo equitativo es: que se cumpla con la disposición que tiene un fin, desde luego recaudatorio; el contribuyente, empresa, puede deducir todo aquello que sea indispensable para la concreción de su actividad, y lo que sea simplemente conveniente no lo puede deducir.

La Segunda Sala de la Suprema Corte tiene dos tesis interesantes: Una, dice: “**DEUDAS DE LOS TRABAJADORES.**- Las derivadas de un contrato de mutuo con interés celebrado con el patrón, no se rige por el artículo 123, Apartado A, fracción XXIV, de la Constitución Federal, salvo que se hayan estipulado como prestación laboral y las condiciones que las rijan formen parte del contrato”. Otra, de la Segunda Sala también, establece lo siguiente: “**DEUDAS DE TRABAJO.**- El hecho de que los artículos 110 y 111, de la Ley Federal del Trabajo reglamenten los descuentos que el patrón puede hacer al salario de los trabajadores con motivo de aquéllas, no rebasa lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracción XXIV, de la Constitución Federal”. En el texto, se dice: “de lo que se trata con esta norma constitucional es abolir con el sistema de tiempos de raya”; palabras más, palabras menos.

Yo creo que el proyecto es perfectamente ajustable a lo que decía el ministro Góngora Pimentel, y yo nada más voy a hacer una observación pidiendo que se haga la supresión. Estoy en la página veinticinco, parte final del primer párrafo; se está dando interpretación al artículo treinta y tantos, de que hablamos, y dice: “Consecuentemente, en aquellos casos en que se pacten intereses mayores al costo del financiamiento de los préstamos otorgados a los socios, terceros o trabajadores, el contribuyente no solo estará en posibilidad de deducir una cantidad equivalente a dicho costo, sino, inclusive, una cantidad mayor a éste”. Saben, con esta lectura ¿cuándo ve algo el fisco? Jamás.

Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE.- Señora ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS.- Gracias señor presidente.

En el presente asunto se viene combatiendo la inconstitucionalidad del artículo 31, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que de alguna manera está permitiendo, dice así: “En el caso de intereses”, bueno, el inicio del artículo está referido a las deducciones, y dice el artículo 31: “Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: Fracción VIII.- En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan invertido en los fines del negocio (punto y seguido). Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores, a sus funcionarios o a sus socios o accionistas, solo serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamo hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores, sus socios accionistas en la porción del préstamo que se hubiere hecho a éstos. Si en alguna de estas operaciones no se estipularan intereses, no procederá la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos hechos a las personas citadas. Estas últimas limitaciones no rigen para instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado u organizaciones auxiliares de crédito, en la realización de las operaciones propias de su objeto. Qué es lo que quiere decir este artículo, este artículo está referido al capítulo de personas morales, al capítulo de generalidades y de manera específica a cómo deben llevarse a cabo las deducciones por estas personas morales. Entonces, lo que nos está diciendo es: cuando una persona moral pida un préstamo a una institución bancaria, cómo va a deducir estos intereses, si es que ese préstamo se destina a actividades propias de la empresa, o se destina al otorgarse como crédito a sus trabajadores. Entonces, nos dice: si

ese préstamo lo solicitas para que lo ocupes para invertir en tu negocio y en los fines específicos de él, no tienes la obligación de pagar ningún...puedes deducir los intereses que en un momento dado resulten de ese crédito, ¡ah!, pero si se los das en crédito a tus trabajadores, entonces vas a pagar la tasa reducida en los términos en que dice de manera específica este artículo. El amparo que ahora se promueve en contra de la inconstitucionalidad de este artículo, dice que la parte correspondiente al otorgamiento de estos créditos hacia los trabajadores es inconstitucional, porque es contrario a lo establecido por el artículo 31, fracción IV de la Constitución, en virtud de que resulta desproporcional e inequitativo, y dice que es desproporcional, porque de alguna manera no refleja la verdadera capacidad contributiva de los contribuyentes, y que es inequitativo porque no les da un trato igual a los iguales; pero fundamentalmente, el proyecto se basa en la negativa del amparo, diciendo que no se viola el principio de proporcionalidad en atención a que de alguna manera el artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, establece la obligación de que los préstamos que los patrones otorguen a sus trabajadores, no pueden pactar interés alguno. Entonces, nos dice el proyecto, que este artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del primero de mayo de mil novecientos setenta, prácticamente sufrió un problema derogatorio con el artículo 78-A, que se establecía en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estuvo vigente en 2001, y que este artículo que decía: Para los efectos de este capítulo, los ingresos en servicio por préstamos obtenidos por los trabajadores con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, se determinarán aplicando el importe de dichos préstamos, una tasa equivalente a la diferencia entre la tasa pactada y la tasa que se establezca anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación, los ingresos a que se refiere este artículo, se considerarán obtenidos mensualmente, y se determinarán aplicando al total del préstamo disminuido, en la parte que del mismo se haya reembolsado, la tasa

que resulte conforme al párrafo anterior, en la parte que corresponda.

Ahora, como todos saben este artículo 78 fue derogado, con motivo de un juicio de amparo en el que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su inconstitucionalidad, entonces, el proyecto lo que nos dice es que si bien es cierto que el artículo 78 fue derogado con posterioridad, que lo cierto es, que como estuvo vigente en alguna época, éste derogó a su vez al artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, y que por esta razón como de alguna manera cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó la constitucionalidad de este artículo, no se refirió precisamente al problema de proporcionalidad, en los términos que se viene analizando en este asunto, sino por un problema más bien de legalidad, porque se estaba gravando una situación de carácter ficticio por parte del fisco, entonces que no interfiere el hecho de que en un momento dado, este artículo esté derogado, que sí se entiende, que derogó a su vez al artículo 111, y que esto hace que al final de cuentas, pues sí resulte desproporcional el artículo 31, fracción VIII. Y, por otra parte, también el proyecto nos dice: que no se viola el principio de equidad tributaria, porque se le está dando el mismo trato a los iguales, puesto que de alguna manera se les está permitiendo que deduzcan los intereses, cuando los préstamos están encaminados a los fines específicos de la empresa y cuando se trata de los trabajadores, bueno, pues se dice que paguen la tasa correspondiente; entonces, que no hay problema de equidad porque se les está dando un trato igual a los que se encuentran en las mismas circunstancias, y que por esta razón no se viola el 34, fracción IV.

Aquí hay un argumento que incluso el ministro Góngora señala en su dictamen, en el que se dice que si bien es cierto que cumple con el aspecto de generalidad el artículo y que no se trata de una ley

privativa, que lo cierto es que sí viola el principio de equidad por las razones que ya había mencionado. Esto no lo contesta el proyecto y hace hincapié el ministro Góngora en su dictamen, pero yo creo que eso sería muy fácil salvarlo si es que se llega al convencimiento de que efectivamente el artículo no resulta violatorio del problema de equidad.

Ahora, qué es lo que en lo personal pienso de estos argumentos. Yo creo que en la forma que propone el señor ministro el proyecto, y que determina que en el sentido de que debe negarse el amparo, yo estoy de acuerdo y coincido plenamente con él en que sí debe ser una negativa del amparo. En lo que me aparto un poquito del proyecto, es en las razones que él está dando tanto en proporcionalidad, quizás en equidad nada más completando con este argumento que he mencionado, que finalmente nada más faltaría contestar una parte del concepto de violación que se hace valer, pero en proporcionalidad yo sí disiento de los argumentos que de alguna manera se están tratando en el proyecto, porque a mí me parece, y creo que también ya lo había señalado el señor ministro Góngora y alguno de los otros señores ministros que me han precedido en el uso de la palabra; efectivamente el señalamiento de que existe una contraposición con lo dicho por el artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que no deben cobrarse intereses a los préstamos que los patrones otorgan a sus trabajadores, pues no es un problema realmente de constitucionalidad, es un problema de legalidad, no se está oponiendo a un precepto constitucional, sino más bien a un precepto de legalidad. Y el problema de que si se entienda o no derogado por el artículo 78, yo en lo personal considero que no lo está derogando. No lo está derogando por qué razón, porque se trata de disposiciones totalmente diferentes que regulan situaciones jurídicas totalmente distintas, la Ley Federal del Trabajo, pues está regulando las relaciones laborales entre patrón y trabajador, y está

determinando según lo leyó el ministro Aguirre Anguiano hace ratito, con la interpretación que esta Suprema Corte de Justicia ha hecho en las tesis que él señaló, cuál fue la razón de ser de este artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, el evitar precisamente que se dieran todos estos problemas de intereses que se venían pagando después por generaciones por parte de los trabajadores, y que dio lugar en su momento ya desde una época muy antigua, las famosas “tiendas de raya”; eso encuentra una justificación específica en lo que ha señalado el señor ministro Aguirre.

Por tanto, yo creo que se está regulando una situación jurídica totalmente diferente. Qué es lo que se regula en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, bueno, pues de qué manera se va a pagar esta contribución, cómo se rige prácticamente este impuesto y cuáles son las modalidades que en un momento dado puede tener.

Entonces, no tiene relación alguna la Ley Federal del Trabajo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no puede estimarse entonces, según mi punto de vista, que un artículo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se estime derogatorio de la Ley Federal del Trabajo.

Entonces, en esta parte yo sí me aparto por completo del proyecto, no coincido con esta argumentación; sin embargo, en el aspecto de proporcionalidad, si nosotros analizamos lo dicho por el concepto de violación y en qué se estima que es desproporcional; bueno, es desproporcional en la medida en que se determina que si en un momento dado el impuesto o la posible deducción está acorde o no con la capacidad contributiva de la empresa.

Y cuando inicié mi intervención lo que mencionaba era, que estábamos en el capítulo específico de personas morales, y en el capítulo específico que nos determina cómo deben realizar las personas morales las deducciones correspondientes. Y ya lo habían

señalado los señores ministros, el señor ministro Cossío, el señor ministro Góngora, el señor ministro Aguirre, que cuáles son los requisitos para que una empresa pueda deducir determinados gastos que lleva a cabo; y los dos requisitos son los que señala prácticamente el artículo 29 en su fracción IX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el sentido de determinar que tienen que ser gastos necesarios e indispensables para la empresa correspondiente, y que además se destinen para los fines de la propia empresa.

Yo entiendo que el otorgar un préstamo a un trabajador, a un socio, a un accionista, pues puede ser definitivamente un acto muy loable por parte de la empresa, el que pueda en un momento dado subsidiar a sus trabajadores o subsidiar a sus socios o a sus accionistas; sin embargo, yo entiendo que si la empresa no se dedica a ser una institución de carácter bancario en el que el fin primordial de su razón de ser sea el otorgar préstamos, pues yo no entiendo que se justifique en realidad que se cumpla con este requisito de la fracción IX del artículo 29 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que dice cuáles son los requisitos que debe satisfacer la deducción de este tipo de intereses y yo creo que el artículo es bastante claro si de alguna manera tu pides como empresa un préstamo a una institución de carácter bancario, pues la primera parte del artículo en su fracción dice eso no, eso por supuesto que lo vas a deducir dice: en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo y estos se hayan invertido en los fines del negocio, esto sí lo vas a poder deducir ¿por qué? Pues porque está dentro de las estipulaciones que se determinan en el artículo 29 fracción IX de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta; ahora que aparte eres muy buena gente y quieres darles préstamos a tus trabajadores y a tus accionistas, bueno pues sométete a las tasas que en un momento dado te están dando de manera privilegiada en la otra parte del otro artículo ¿por qué? Porque no es

tu finalidad, dedicarte a dar préstamos, tu finalidad y tu objeto es otro, totalmente diferente, totalmente distinto y por tanto estás en la obligación de no poder deducir esos intereses porque no estás en el supuesto que marca el artículo 29 fracción IX; por estas razones yo sí coincido, coincido con lo dicho por el señor ministro Gudiño Pelayo en el sentido de que debe negarse el amparo y que el artículo 31 fracción VIII es perfectamente constitucional; sin embargo, sí me aparto sobre todo de las razones a las que se refiere el estudio en la parte relacionada con proporcionalidad o con equidad nada más, me conformaría con que se contestara el argumento correspondiente a lo del artículo 13 relacionado con la ley privativa, pero también considero que no es violatorio del artículo 31 fracción IV, porque no es inequitativo, está dándole un trato de igual a los iguales y desigual a los desiguales, gracias señor presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor ministro Gudiño Pelayo.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: Muchas gracias, en primer lugar agradecer a los señores ministros las observaciones y objeciones, todas son muy complejas, no coinciden todas en un mismo punto, hay algunas observaciones que son contradictorias; entonces yo propongo a este H. Pleno, se me permita aplazar el asunto para dar respuesta a cada una de las observaciones y en su caso presentar la propuesta; por otro lado, tenemos cuarenta asuntos listados y yo creo que aplazando este estudio me da tiempo de reflexionar sobre las observaciones y dar en fecha próxima una adecuada respuesta, pediría también al Doctor Cossío, si me pasa el documento para proceder a su análisis, gracias señor presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor ministro Silva Meza.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Gracias, frente a la solicitud que hace el señor ministro ponente, yo también, si no tienen inconveniente, le haré llegar algún documento, coincido en el sentido de lo decidido, pero hay algunas diferencias en el tratamiento sobre todo y también en el tema de proporcionalidad aunque con argumentos diferentes a los de la señora ministra.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora ministra Sánchez Cordero.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Yo también le haré llegar un dictamen que tengo en relación a su proyecto y en ese sentido yo no comparto el proyecto, yo voy más bien por la línea del ministro José Ramón Cossío, pero de todas maneras le haré llegar el dictamen al señor ministro Gudiño, gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor ministro Franco González Salas.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias señor presidente, yo estoy por el sentido del proyecto y muy en la línea de razonamientos que se han vertido, particularmente los últimos de la ministra Luna Ramos; sin embargo, tengo dos dudas que quisiera plantear, la primera me parece que el proyecto debe sobreseer, sobre los párrafos segundo y tercero del artículo, dado que en realidad todas las argumentaciones se hacen exclusivamente sobre el primer párrafo de la fracción VIII y ésta tiene tres párrafos; consecuentemente me parece que se debe sobreseer por lo que hace al párrafo segundo y tercero de esa fracción y luego tengo una duda que aquí no se ha planteado, en relación a la redacción de la fracción VIII, señala ya la he leído pero quiero referirme a la última parte, en el caso de interés por capitales tomados en préstamo, estos se hayan invertido en los fines del negocio, yo coincido con la

explicación que dio la ministra Luna Ramos, luego viene la excepción: “Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores, a sus funcionarios o a sus socios o accionistas, sólo serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamos, hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores, a sus socios o accionistas, en la porción del préstamo que se hubiere hecho a éstos. Si en alguna de estas operaciones no se estipularan intereses, no procederá la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos hechos a las personas citadas”.

A mí me parece que la razón de esta norma, es evitar que haya un beneficio indebido, al hacer deducible ese tipo de intereses, puesto que el que lo estaría pagando es el Erario, y no quien está otorgando el préstamo. Pero la parte final dice: “Estas últimas limitaciones no rigen para instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto ilimitado, u organizaciones auxiliares del crédito -los quejosos en este caso caen dentro de esta clasificación- en la realización de las operaciones propias de su objeto”. Quiere decir que, tienen que haber hecho operaciones para que estén en la excepción de la fracción, diferentes a las que son propias de su objeto; consecuentemente, aquí el punto está en si las hicieron como patrón, el punto concreto, y aquí ya se ha argumentado suficiente que en este caso hay el marco jurídico correspondiente para cuando, precisamente en estos supuestos, procede o no la deducción de los intereses. A mí me parece, luego entonces, que inclusive, podría haber una posible causa de sobreseimiento, y es una duda conforme a la fracción V del 73, por carecer de interés, dado que precisamente encuadra en esta excepción de la fracción en su parte final. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Bien, un comentario, la sentencia del juez se ocupa del tema, y el amparo se promovió con

motivo de un acto de autoaplicación del quejoso, en donde, a partir de ahí demuestra su interés jurídico y encontrarse en la hipótesis. Pero, hay varias observaciones que ya el señor ministro ponente tendrá en cuenta. Quiere agregar algo la señora ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor presidente. Sí, a raíz de la duda del señor ministro Franco, él tenía aquí a la mano el expediente, y sí, efectivamente se trata de una institución bancaria, es la quejosa, Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex, Casa de Bolsa, Invex Grupo Financiero, Invex Servicios Corporativos. Sin embargo, en el capítulo de hechos, es importante señalar esto, dice: "Mis representadas son sociedades mercantiles, constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, mis mandantes contratan capital en préstamo, por lo que se encuentran obligadas a pagar intereses, y que finalmente destinan para otorgar préstamos a sus trabajadores como tipo de remuneración al trabajo personal subordinado". O sea, no están dándole el préstamo como que el trabajador es un cliente, en el que finalmente, bueno caerían en la última parte de la fracción VIII, como bien lo señala el ministro Franco, del artículo 31, aquí están como patronos, otorgando el crédito a sus trabajadores, que ellos obtienen a su vez de otro financiamiento, y lo que pretenden es que se declare la inconstitucionalidad de esta parte del artículo, en la que se les obliga al pago de este interés a una tasa reducida. Gracias señor presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pues, ha pedido el aplazamiento el señor ministro ponente, creo que no amerita acuerdo del Pleno, se autoriza dicho aplazamiento, y en consecuencia, continuamos con los siguientes asuntos de la lista, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NÚMERO 59/2006, PROMOVIDA POR EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN CONTRA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21-A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 28-B, 72-A Y 79-A DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 3º, FRACCIONES XV Y XVI, 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 13, 64 Y 65, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, CONTENIDOS EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVIDAD MENCIONADA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE ABRIL DE 2006.

La ponencia es del señor Juan N. Silva Meza, y en ella se propone:

PRIMERO. ES PARCIALMENTE PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADA LA PRESENTE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

SEGUNDO. SE SOBRESEE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL POR LO QUE RESPECTA A LA DESIGNACIÓN DE LOS COMISIONADOS Y DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO CUARTO DE ESTA RESOLUCIÓN.

TERCERO. SE SOBRESEE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 17-E, FRACCIÓN V, 20 Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL CONSIDERANDO CUARTO DE ESTA SENTENCIA.

CUARTO. CON LA EXCEPCIÓN ANTERIOR, SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17-E, 17-F, 17-G, 20, 21-A, DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN UN TRATO DIFERENCIADO A CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS EN MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN ASÍ COMO ENTRE PERMISIONARIOS OFICIALES Y LOS DEMÁS PERMISIONARIOS, Y ASIMISMO EN CUANTO NO LIMITAN LAS FACULTADES QUE EL ARTÍCULO 2º CONSTITUCIONAL LE OTORGA AL MUNICIPIO ACTOR, EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN LOS CONSIDERANDOS SEXTO, SÉPTIMO Y NOVENO DE ESTE FALLO.

QUINTO. SE RECONOCE LA VALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, SEGUNDA PARTE, DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL CONSIDERANDO OCTAVO DE ESTA SENTENCIA.

SEXTO. PUBLÍQUESE ESTA EJECUTORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Por ser un tema de previo y especial pronunciamiento el que nos va a plantear, le concedo el uso de la voz al señor ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Muchas gracias señor presidente. En la sesión pasada, del 21 de mayo de este año, se analizó la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, en la cual fue ponente el señor ministro Aguirre Anguiano; en ese asunto se analizaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión.

Como ustedes lo saben, en los asuntos que están listados en la lista oficial ordinaria 33 de 2007, con los números económicos 2 a 45, se están impugnando los mismos ordenamientos, y a mi parecer se actualiza la misma causal de impedimento que en su momento hice valer en esa Acción de Inconstitucionalidad, simplemente lo

recuerdo, el hecho es que me constituí en asesor de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, precisamente para hacer análisis de constitucionalidad de las disposiciones que conforman esta Legislación, en el año 2000 y 2003, antes de incorporarme por supuesto a esta Suprema Corte de Justicia.

Este asunto ya fue votado en esa misma sesión del 21 de mayo, pero quisiera hacerlo valer en esta ocasión por congruencia en relación, insisto, a los asuntos que presenta el señor ministro Silva Meza, que son del 2 al 45 de esta lista ordinaria 33/2007, señor presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Aunque sólo se dio cuenta con el primero de estos asuntos, es clara la manifestación del señor ministro de que se refiere a la totalidad de este grupo de asuntos en los que se impugna la Ley Federal de Radio.

Está a consideración de los señores ministros el impedimento que plantea don José Ramón Cossío.

Si no hay manifestaciones, les consulto su aprobación.

Perdón, tiene el uso de la palabra el señor ministro Aguirre Anguiano.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Señor presidente gracias. En aquella ocasión me manifesté en el sentido de que el señor ministro Cossío, a mi parecer, no estaba impedido para participar, desde luego estuve en la minoría; hoy estamos hablando de controversia constitucional y no de acción de inconstitucionalidad, pero finalmente aquellas normas, o algunas de aquellas normas, fueron expulsadas del orden jurídico mexicano, no veo por qué puede estar impedido el señor ministro Cossío, entonces mi voto es en el sentido de que no es legal el impedimento del ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor ministro Góngora Pimentel.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Es uno de los puntos que quiero yo tratar de que no fueron en su totalidad puestas fuera del sistema jurídico mexicano, y creo que son observaciones que tengo que hacer al proyecto y, por tales razones yo creo que sí está inmerso in curso de impedimento el señor ministro Cossío, porque se trata de normas que no fueron sacadas del ordenamiento jurídico mexicano en su totalidad, por eso yo voto porque está inmerso in curso de impedimento.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor ministro Azuela.

SEÑOR MINISTRO AZUELA GÜITRÓN: Únicamente unirme a lo expuesto por el ministro Aguirre Anguiano, yo considero que no está en causa de impedimento.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Alguien más de los señores ministros. Habiendo diversidad de opiniones instruyo al secretario para que tome votación nominal, excluyendo desde luego al señor ministro Cossío.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor ministro presidente.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: No está in curso en causa de impedimento.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Yo creo que aun cuando se trata de una controversia constitucional a diferencia de la acción de inconstitucionalidad anterior, los temas a tratar son exactamente los mismos que la acción de inconstitucionalidad; por estas razones yo considero que sí está en causa de impedimento.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Por las mismas razones, considero que está in curso en causa de impedimento.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: En el mismo sentido que votó la señora ministra dona Margarita Beatriz Luna Ramos.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: Sí está in curso de impedimento.

SEÑOR MINISTRO AZUELA GÜITRÓN: No está, en los términos precisados por el ministro Aguirre Anguiano.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Sí está in curso de impedimento.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Está legalmente impedido.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE, ORTIZ MAYAGOITIA: Mi voto es en favor del impedimento planteado.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor ministro presidente, hay mayoría de siete votos en el sentido de que es legal el impedimento que hace valer el señor ministro Cossío Díaz, para conocer de estos 44 asuntos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: EN CONSECUENCIA, SE LE DECLARA LEGALMENTE IMPEDIDO AL SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ, EN ESTE GRUPO DE ASUNTOS Y, POR LO TANTO, NO PODRÁ PARTICIPAR EN ELLOS.

(EN ESTE MOMENTO ABANDONA EL SALÓN DE SESIONES EL SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ)

Tiene la palabra el señor ministro Silva Meza para la presentación de este primer asunto.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Gracias señor presidente. La controversia constitucional de la que ha dado cuenta el señor Secretario General de Acuerdos, se promovió por el Municipio de Coxcatlán, Estado de San Luis Potosí, en la que solicitó la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de abril de dos mil seis, así como de la designación de los comisionados y del presidente comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El Municipio promovente estima que las normas y actos impugnados son violatorios de los artículos 1º, 2º, 6º, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 115, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante destacar, que la presente controversia constitucional así como las diversas registradas bajo los números 60/2006 a la 104/2006, esto es, excepción hecha de la 62/2006 y 103/2006, tienen relación con los temas analizados en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, resuelta, como ya se ha dicho por este Tribunal Pleno en sesiones de 24, 28, 29 y 30 de mayo; 4, 5, 6 y 7 de junio de este dos mil siete.

En la ponencia que someto a su consideración se propone:

Declarar parcialmente procedente y parcialmente fundada la controversia; sobreseer por lo que respecta a la designación de los comisionados y del comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y por cuanto hace a los artículos 17-E, fracción V; 20 y 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión; con la excepción anterior, se reconoce la validez de los artículos 17-E, 17-F, 17-G, 20 y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, en cuanto establecen un trato diferenciado a concesionarios y permisionarios en materia de radio y televisión, así como entre permisionarios oficiales y los demás permisionarios y asimismo en

cuanto no limita las facultades que el artículo 2º constitucional le otorga al Municipio actor, también reconocer la validez del artículo 20, fracción II, Segunda Parte, de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Esta propuesta se sustenta básicamente en las siguientes consideraciones; por lo que respecta al sobreseimiento en cuanto a la designación de los comisionados el Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se decreta dicho sobreseimiento al estimarse fundada la causa de improcedencia invocada por el Procurador General de la República en el sentido de que el Municipio actor carece de interés legítimo para combatir la referida asignación, toda vez que no afecta su esfera de competencia.

Lo anterior porque de un análisis de los artículos 89, fracción II, 90 y 115 de la Constitución Federal, 2 y 17 de la Ley de la Administración Pública Federal y 3º fracción XI, 9-A, 9-B y 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se desprende, por una parte, que constitucionalmente corresponde al presidente de la República designar a los titulares de las dependencias, órganos descentralizados y órganos desconcentrados dependientes del Ejecutivo Federal y por otra al no existir disposición constitucional que faculte o autorice a los Municipios a participar en dicha designación es innegable desde nuestro punto de vista, que el Municipio actor carece de interés legítimo para cuestionar la designación de los miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en tanto que tal designación no afecta su ámbito de atribuciones ni tampoco es susceptible de causarle una afectación o privarlo de algún beneficio al que tuviera derecho.

El sobreseimiento que se propone en relación con los artículos 17-E, fracción V, 20 y 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión derivó

de la declaratoria de invalidez que de dichos artículos este Tribunal Pleno determinó al resolver la acción de inconstitucionalidad 26/2006 el primero, por mayoría de 8 votos de los señores ministros, señora ministra Luna Ramos, señor ministro Franco González Salas, Góngora Pimentel, Azuela Güitrón, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Silva Meza y el presidente Ortiz Mayagoitia y los dos últimos por unanimidad de 9 votos de los señores ministro Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Azuela Güitrón, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Ortiz Mayagoitia.

Lo anterior con apoyo también en las tesis de jurisprudencia de rubros:

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARA LA INVALIDEZ DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, DEBE ESTIMARSE QUE HAN CESADO LOS EFECTOS DE AQUELLA, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO” y;

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN EL PLENO RESUELVE EN OTRA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD LA INVALIDEZ CON EFECTOS ABSOLUTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE CONSIDERARSE QUE HAN CESADO SUS EFECTOS Y POR TANTO, PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO”.

En el Considerando Quinto, se propone: Que el Municipio actor carece de interés legítimo para formular en una demanda de controversia constitucional, conceptos de invalidez en defensa de algún sector social que se encuentre geográficamente dentro de su territorio en el caso de los pueblos y comunidades indígenas por virtud de que de conformidad con los criterios jurisprudenciales emitidos por este Alto Tribunal, la tutela jurídica de esta vía constitucional es la protección del ámbito de atribuciones que la norma fundamental prevé para las Entidades, Poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 constitucional, para resguardar el sistema federal así como preservar la regularidad en

el ejercicio de estas atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órganos, por lo que para que proceda esta vía se requiere que la norma o acto impugnados sean susceptibles de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte promovente, la cual, necesariamente, deberá estar legalmente tutelada y en consecuencia los conceptos de invalidez que se formulen, deben ser tendentes a demostrar que tales actos o normas afectan su esfera jurídica.

En el proyecto se asevera que sostener lo contrario desnaturalizaría la esencia misma de la controversia constitucional, convirtiéndolo en un control abstracto, lo cual desde nuestro punto de vista no es propio de la naturaleza de esta vía constitucional, cuando además, dentro de nuestro sistema jurídico, está previsto el juicio de amparo, como medio de defensa constitucional a favor de los gobernados, cuando se vean afectados por leyes o actos emitidos por las autoridades.

En el Considerando Sexto, se propone reconocer la validez de los artículos 17-E, 17-F, 17-G, 20 y 21-A, de la Ley Federal de Radio y Televisión, en cuanto al tema relativo al trato diferenciado a concesionarios y permisionarios en el régimen para el otorgamiento de concesiones y permisos en materia de radiodifusión. Al respecto, cabe señalar que el proyecto se presenta en los términos propuestos, inicialmente en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, tema respecto del cual, se desestimó dicha acción de inconstitucionalidad, toda vez que el resultado de la votación fue de cinco votos, de los ministros Góngora Pimentel, Azuela Güitrón, Valls Hernández, Sánchez Cordero y Silva Meza, en el sentido de declarar su invalidez, en contra del voto de los señores ministros, Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas y presidente Ortiz Mayagoitia.

En el Considerando Séptimo, se propone reconocer la validez del artículo 21-A, de la Ley Federal de Radio y Televisión, toda vez que, contrariamente a lo aducido por el Municipio actor, la diferencia de trato otorgado a los permisionarios, obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, ya que, al ser los primeros parte del Estado, se encuentran sujetos a un marco legal específico para su actuación y su propósito debe responder a aspectos de interés público, por lo que tal distinción, no se traduce en la infracción o vulneración de algún derecho fundamental, ni imposibilita el acceso de las personas morales oficiales en la obtención de permisos en la materia que resulten acorde a sus fines.

A idéntica conclusión llegó este Tribunal Pleno, en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, cuyo resultado de la votación en este punto fue de mayoría de ocho votos, de los ministros, Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Azuela Güitrón, Valls Hernández, Sánchez Cordero y presidente Ortiz Mayagoitia, en contra del voto del ministro Silva Meza.

En el Considerando Octavo, se propone reconocer la validez de la segunda parte de la fracción II del artículo 20 de la propia Ley Federal de Radio y Televisión, ya que la referida porción normativa establece reglas precisas para el uso de la facultad otorgada a la autoridad, ya que con claridad se determina que la información de que se trata, se podrá recabar de otras autoridades e instancias, y sólo con el propósito de tener un conocimiento cabal respecto de la solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate.

También, en iguales términos se pronunció este Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, por una mayoría de cinco votos, de los señores ministros Aguirre Anguiano, Franco González Salas, Azuela Güitrón, Valls Hernández y presidente Ortiz

Mayagoitia, en contra de los votos de los ministros Luna Ramos, Góngora Pimentel, Sánchez Cordero y Silva Meza.

Finalmente, en el Considerando Noveno, se propone declarar infundados los conceptos de invalidez, relativos a que los artículos combatidos, son violatorios del artículo 2° de la Constitución Federal, porque contrario a lo así manifestado, de dichos numerales ni de algún otro de la Ley, se advierte que se impida al Municipio actor, para que dentro de la esfera de su competencia, realice las obras y acciones a que se refiere el citado artículo 2° de la norma fundamental.

Señores ministros, éstas son en síntesis las consideraciones que sustentan la propuesta que ahora se ha puesto a su disposición. No omito señalar a ustedes, que a partir de que fueron distribuidos los proyectos, he recibido dictámenes, he recibido comentarios, observaciones respecto de los cuales, algunos de ellos coincidiendo con el tratamiento del proyecto, otros no coincidentes con ese tratamiento, y, algunos de ellos han tenido alguna respuesta sometida a su consideración, hemos recibido también respuestas a la respuesta, en atención a la complejidad de estos temas que, la sola emisión de los dictámenes y la problemática que en los mismos se detallan lo evidencian, estoy abierto desde luego, a escuchar todas las opiniones de los señores ministros para tener una buena decisión colegiada.

Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Conforme a la información que nos da el propio señor ministro ponente, se advierte que habrá un intercambio interesante de opiniones jurídicas en este asunto; por lo tanto, para llevar la discusión con orden, pongo a consideración del Pleno, los primeros temas procesales, propiamente, que se refieren a competencia de este Tribunal Pleno, oportunidad de la demanda. En oportunidad, señor ministro Góngora Pimentel.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL.- Estoy de acuerdo con el proyecto, por lo que se refiere a que la demanda fue presentada oportunamente en relación con las normas impugnadas. Sin embargo, considero que se omite atender la demanda en su integridad, cosa que siempre ha procurado la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, puesto que en el tercer concepto de invalidez, de las fojas 13 a la 20, se desprende que la parte actora reclama una omisión legislativa. En efecto, la parte actora impugna lo que califica como una omisión relativa en facultades de ejercicio obligatorio, porque considera que en ninguno de los preceptos reformados se observa que el Legislador haya regulado la prestación del servicio de radiodifusión, por parte de los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embargo, atendiendo la causa de pedir, considero que en realidad se reclama una omisión *absoluta* en facultades de ejercicio obligatorio.

Lo anterior tiene trascendencia tanto para efectos de la oportunidad, que es lo que vemos, como para efectos del estudio del asunto. Si es una omisión relativa, entonces lo reclamado es la norma, y por tanto el cómputo se realizará en relación con ésta. En cambio, si se considera que se reclama una omisión absoluta, la demanda será oportuna toda vez que se impugna una omisión.

Estimo que la parte actora plantea una omisión absoluta en facultades de ejercicio obligatorio, puesto que alega el incumplimiento de lo ordenado en el artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, que establece la obligación de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de

comunicación, dice la Constitución, en los términos que las leyes de la materia determinen.

Este precepto determina una obligación al Legislador, en específico al Legislador federal, encargado de regular de manera exclusiva las vías generales de comunicación, para que tome medidas a fin de hacer posible ese derecho constitucional.

Es necesario tener en cuenta que no se impugna la norma por una cuestión de igualdad formal sino de igualdad real; esto es, no se reclama el contenido de la norma por considerar que contiene una distinción injustificada, sino que se pretende que la ley distinga, que tome acciones afirmativas y realice una regulación particular respecto de los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de acabar con la discriminación histórica a que éstos han sido sometidos.

En este tenor, si esta omisión existiera, la existencia implicaría la vinculación del Congreso para que legisle y no la invalidez de la norma; razón por la cual considero que estamos ante una omisión absoluta.

Así mismo, la obligación de actuar del Congreso de la Unión existe, puesto que además de lo regulado en el artículo 2, apartado A, fracción VIII, constitucional, debemos tomar en cuenta el artículo Segundo Transitorio del decreto por el que éste fue reformado, el cual dispone, cito: “Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y Constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado. -Eso dice el artículo Segundo Transitorio-. En este tenor, la impugnación de esta omisión absoluta es oportuna, porque al día de hoy no se ha dictado norma alguna que establezca condiciones jurídicas para que los

pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. Hasta ahí el tema, señor presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Alguien más desea tomar el uso de la palabra.

Señor ministro Azuela.

SEÑOR MINISTRO AZUELA GÜITRÓN: Hemos debatido ampliamente lo relacionado con la omisión legislativa y hemos estimado que esto no puede ser materia de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad; el artículo 41 que hace referencia a los elementos que debe contener una sentencia, no contempla esa situación, simple y sencillamente habla que debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia; no está previsto que contenga las omisiones planteadas. Por lo mismo pienso que eso se debe reiterar.

Por otro lado, debo señalar que aquí hay una paradoja, porque la ley no prohíbe que las comunidades indígenas puedan participar en obtener los permisos, las concesiones, etcétera, y digo que es paradoja, porque querer que haya menciones especiales en las comunidades indígenas, pues al menos ya implica cierta violación la equidad de género, porque se tiene que distinguir a una comunidad que en ese sentido ya se le estaría disminuyendo; después se podrían hacer otros planteamientos sobre otro tipo de personas que también, si no se les señala expresamente, pues también se les estaría disminuyendo. No, yo creo que las leyes son generales, y si en las leyes no se está excluyendo a determinado tipo de personas, pues no se puede considerar que haya omisión, tendría que haber un catálogo, y cualquier distinción que se diera, habría que señalar en forma específica. Yo creo que no es propio de las leyes; los

seres humanos somos iguales en esencia, pero lo propio de esa esencia es que somos individuales, y entonces llegaríamos al absurdo de que tendría que mencionarse a todos los mexicanos con su nombre y apellido, porque de otra manera estimaríamos que no se nos está tomando en cuenta en cuanto a las posibilidades de conseguir una concesión. De modo tal, que por un lado, yo reitero mi posición de que esto no está previsto para omisiones legislativas; se da esa situación muy clara de cuando hay un precepto que de manera clara, como ya lo hemos tenido, está señalando: Debes tú hacer esto, no vas a ir añadiendo a todas las legislaciones un capitulito de, a las comunidades indígenas.

Por ello, creo que esta observación que tiene que ver, de algún modo con algo previo, pues no puede ser tomada en cuenta en el proyecto respectivo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señores ministros, está casi por dar la una, quiero proponerles que prolonguemos esta sesión quince minutos más, con la finalidad de que al receso dé yo por concluida la pública y regresemos a nuestra sesión privada que tenemos pendiente.

Tiene la palabra el señor ministro Aguirre Anguiano.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Es en conexión con algunas de las afirmaciones que ha hecho el señor ministro Azuela Güitrón; todos somos iguales ante la ley, pero estas esencias permiten que se hagan distingos, y el artículo 2º de la Constitución, nos habla de los pueblos indígenas, y aquí hay un distingo que no rompe la igualdad desde el punto de vista de la dignidad humana, pero sí toma en cuenta ciertos factores de desarrollo diferentes y, en su fracción VI, dice: “extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción

y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación; establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos de las leyes que la materia determine”.

La puntualización que yo quiero hacer, es la siguiente: Evidentemente, esta disposición no evita que los indígenas puedan, conforme a las leyes ordinarias, solicitar y obtener sus radiodifusoras; pero sin embargo, sí existe un mandato constitucional que obliga al Poder Legislativo, tanto estatal como federal, a normar la materia acatando el mandato de la Constitución; y esto es evidente que no se ha cumplido.

Ahora, ¿con esto trato de cambiar el criterio de la Corte tomado en cuanto a la omisión legislativa?; por supuesto que no, yo tengo mi criterio que haré reserva con él; pero votaré en el sentido de la mayoría; no pienso que vaya a cambiar de opinión en este sentido, en este momento y por razón de estas controversias.

Nada más quería hacer esa puntualización, muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ministra Luna Ramos, tiene la palabra.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias, señor presidente.

Yo creo que nos estamos adelantando un poquito al tema, porque como que se están dando razones de fondo, de si procede o no la omisión legislativa; y creo que todavía estamos en el capítulo de procedencia.

Creo que la objeción del señor ministro Góngora, era en el sentido de determinar si en la parte de oportunidad podía considerarse o no

que la omisión legislativa estaba reclamada y que además es oportuna porque es una omisión total, no es una omisión parcial.

Entonces, creo que en este punto específico el pronunciamiento tiene que ser si la omisión legislativa, aunque no esté señalada en el capítulo específico de actos reclamados, sí viene combatida en otra parte de la demanda; y que por tanto, se tiene como acto reclamado; y al tenerla como acto reclamado, si es o no oportuna la presentación de la demanda respecto de la omisión legislativa.

Creo que a eso se refería la parte correspondiente que mencionó el señor ministro Góngora en su dictamen.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Sí, señora ministra.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Y yo en este aspecto lo que diría: tiene razón, es un acto que se está reclamando dentro de la demanda, no está señalado en el capítulo específico de actos destacados; pero de alguna manera, se advierte de la lectura integral de la demanda; y, desde luego, es oportuna porque es una omisión total.

Creo que hasta ahí nos podíamos quedar, y ya cuando entremos al fondo, decir si estamos o no de acuerdo –que de alguna manera, ya hay criterio adelantado en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tiene la palabra la ministra Sánchez Cordero.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Gracias, señor presidente.

Yo creo que tiene razón la señora ministra, específicamente es en el Capítulo de Procedencia, sí está reclamada, y bueno, como se empezó a discutir ya el fondo, inclusive yo ya traía el documento relativo al fondo; y entre otras cosas, éstas son controversias constitucionales, no acciones de inconstitucionalidad; y por lo tanto, lo que se dijo en la acción de inconstitucionalidad, en el caso precisamente de la ponencia del señor ministro Aguirre, difiere, en tanto que aquí es controversia constitucional y el criterio de la Corte en materia de controversias constitucionales y omisiones legislativas, pudiera llegar a ser distinto; pero ya eso es fondo. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Alguien más, señor ministro Silva Meza, no?

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: No, ¡perdón! Si nadie quiere hacer ya uso de la palabra.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Yo haría algún comentario. Nos pide el señor ministro Góngora Pimentel, que detectemos un acto que no fue expresamente reclamado.

En la página uno y dos de la demanda viene el planteamiento formal de los actos reclamados y entre ellos, de ninguna manera aparece la omisión legislativa; por interpretación de la demanda podemos llegar a decir: también reclamaron omisión legislativa.

En la Acción de Inconstitucionalidad se propuso que se tuviera como acto reclamado la omisión legislativa; y la votación mayoritaria fue en el sentido de que no se tuviera como tal.

Sin embargo, la ministra Luna Ramos, nos dice: está muy claro el planteamiento de omisión legislativa porque hay un concepto de invalidez.

Esto nos lleva más que a oportunidad de la demanda, primero, a la precisión de los actos reclamados; los actos a reclamados son los que expresamente plantea el Municipio, además en el concepto de violación tal, aduce omisión legislativa y por lo tanto se tiene también como acto reclamado y en el Capítulo de Oportunidad, todas las razones de oportunidad de la demanda, aun en contra de la omisión legislativa, ésta sería la propuesta del señor ministro Góngora Pimentel, así lo entendí. Señor ministro Silva Meza.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Gracias. Con esta propuesta precisamente aceptada, se haría la precisión de los actos reclamados, la mención a la omisión legislativa, inclusive el señalamiento a los párrafos concretos donde de manera, aunque hay todo un desarrollo donde hay párrafos, donde de manera creo que significativa puede resultar clara esta precisión como acto reclamado y ya en el tema de oportunidad se haría la consideración correspondiente, yo estoy totalmente de acuerdo, así se haría.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Habiendo aceptado el ponente la modificación solicitada, consulto al Pleno si damos por superados estos dos temas. Actos reclamados, oportunidad de la demanda y vamos ahora a la legitimación de las partes, la activa y la pasiva, hay comentarios sobre el particular, señor ministro Gudiño.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: Repartí un documento, en la página dos se aborda el tema de Falta de Interés Legítima.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pero eso es causa de improcedencia señor ministro, estamos sólo en el aspecto formal del

de legitimación, damos por superado el tema de legitimación procesal activa, vamos ahora a las causales de improcedencia en las que efectivamente el señor ministro Gudiño Pelayo nos ha repartido un documento, quiere usted que le den lectura, señor secretario los puntos uno al tres, donde dice opinión en la página dos.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Opinión. Uno.- Causales de Improcedencia (falta de interés legítima). A partir de la página 55 se analizan las causas de improcedencia haciendo referencia a aquéllas en las que se plantea que el Municipio actor carece de facultades para representar a los pueblos y comunidades indígenas, además de que la Ley impugnada no afecta su ámbito de atribuciones, este tema no se analiza como causal de improcedencia, sino que su estudio se remite al fondo del asunto por tratarse propiamente de un problema de interés legítimo; sin embargo, en la página 58 se declara fundado el diverso argumento del procurador en el cual sostiene que el actor carece de interés legítimo para impugnar la designación de los comisionados de la COFETEL, toda vez que tal designación no afecta su esfera de competencia, aparentemente es incongruente que el tema de Interés Legítimo se trate por un lado, en las causales de improcedencia y por el otro, en el estudio de fondo; sin embargo, el proyecto se apoya en dos diversas tesis del Tribunal Pleno. La primera de ellas sostiene que cuando la falta de interés legítimo es evidente, bien puede estudiarse junto con las causales de improcedencia. La segunda tesis sostiene que el estudio de interés legítimo exige abordar los temas de fondo, razón por la cual en algunos casos debe estarse a esto último; por lo tanto, estimo que en este punto es correcto el tratamiento que brinda el proyecto a los problemas de interés legítimo.

Dos.- Texto legal a la luz del cual debe analizarse el problema de constitucionalidad planteado. La controversia constitucional también se sobreesee por lo que se refiere a las porciones normativas contenidas en los artículos 17, 20 y 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que ya fueron declaradas inconstitucionales, al resolverse la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, por tal motivo sugiero que cuando se transcriben estos mismos numerales en la página 89 y siguientes, también se supriman las porciones normativas que ya se declararon inconstitucionales con efectos generales, pues estimo que ya será sobre estos preceptos modificados con base en los cuales este Alto Tribunal debe pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Tres.- Estudio de fondo. Falta de interés legítimo del Municipio actor. Se comparten las consideraciones vertidas en el Considerando Quinto de la ejecutoria en el sentido de que el Municipio no tiene interés legítimo para impugnar posibles violaciones cometidas en perjuicio de los pueblos indígenas, en adición a lo expresado en el proyecto me permito sostener que el artículo segundo constitucional prevé una serie de obligaciones a cargo de los tres niveles de gobierno (federales, estatal y municipal) concretamente desde el punto de vista ejecutivo y legislativo.

Sin embargo, no establece que esos niveles de gobierno deban asumir la tutela judicial de los pueblos y comunidades indígenas; no por ello, estos últimos grupos quedan en estado de indefensión, pues en términos del artículo en comento, apartado A, fracción VIII, los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, ya sea de manera individual o colectiva; por lo tanto, sugiero que el proyecto se refuerce con esta afirmación.

Además el artículo 2º, constitucional, hace referencia a una esfera de derechos que corresponde en exclusiva a los pueblos indígenas quienes forman una unidad social, económica y cultural, que no necesariamente se identifica con un Municipio en específico; de hecho, la Constitución sostiene que los pueblos indígenas estarán asentados en un territorio, y que reconocerán autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, lo que les da una identidad distinta a la del Municipio.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Como se ve, el punto número uno, es, un simple comentario, porque al final se manifiesta de acuerdo. El punto número dos, es una sugerencia para que en la transcripción de los preceptos se suprima la parte que fue invalidada; y en el estudio de fondo, habla de esta precisión de la entidad jurídica propia de las comunidades indígenas, es una sugerencia también.

Tiene la palabra el señor ministro Góngora Pimentel.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Hay varias causas de improcedencia, pero hemos entrado de sopetón a la causa de improcedencia de interés legítimo del Municipio, no sé si tratar primero las causas de improcedencia previas, o siguiendo el camino de una vez el interés legítimo del Municipio.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Como usted lo prefiera. Yo diría que hablemos del interés jurídico del Municipio, y las otras las tratemos a continuación, señor ministro.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Sí señor presidente.

En el proyecto se sostiene que el Municipio carece de interés legítimo, para reclamar la violación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que habitan en su territorio, al no tener

relación con la esfera de atribuciones que constitucionalmente tiene conferidas; por lo que se propone, no analizar los conceptos de invalidez planteados al respecto en la demanda; asimismo, se considera que de entrar al análisis de estas normas, a la luz de los conceptos de invalidez referidos a la violación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se desnaturalizaría la controversia constitucional, pues se le convertiría en una forma de control abstracto de la constitucionalidad; y que además, en nuestro sistema jurídico está previsto el amparo, como medio de defensa constitucional de los gobernados.

Para concluir lo anterior, el proyecto realiza una revisión de los artículos 115 y 2 apartado B, de la Constitución Federal, advirtiendo que en ninguno de ellos se faculta a los municipios para que cuando accionen una controversia constitucional, puedan hacer valer conceptos de invalidez en defensa de los pueblos y comunidades indígenas; -desde luego que no viene, pues sería casi, casi, una Ley Orgánica- no comparto yo en esto el sentido del proyecto, porque en mi opinión, los municipios, sí cuentan con interés legítimo para impugnar las normas que afectan a los pueblos y comunidades indígenas en ellos asentados, disiento de la metodología del proyecto, porque me parece un poco infructuoso buscar una norma, que expresamente refiera que cuando los municipios promuevan controversia constitucional, pueden defender también los derechos de los indígenas; en mi opinión, debe realizarse una interpretación constitucional, que tome en cuenta la relación estructurada en la Constitución respecto de los municipios y las comunidades y pueblos indígenas.

El proyecto cita en el apartado B, del artículo 2 constitucional y el artículo 115 constitucional; sin embargo, omite referirse al apartado A, al último párrafo de la fracción III del artículo 115 constitucional y,

en general, a los documentos generados en el procedimiento de reforma constitucional.

En efecto, la reforma constitucional en materia indígena publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, surge en un contexto histórico muy claro, que tiene como origen el olvido y la marginación de los pueblos indígenas; surge a raíz del alzamiento del "Ejército Zapatista de Liberación Nacional" y su lucha por la reivindicación de los derechos de los indígenas; el cese al fuego y un posterior esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y el (EZLN), para lograr acuerdos como los finalmente plasmados en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar.

Con el fin de traducir estos acuerdos en normas, el Poder Legislativo a través de la Comisión de Concordia y Pacificación, elaboró un texto que finalmente fue presentado como iniciativa de reformas constitucionales, por el presidente de la República; texto que fue discutido y modificado en las Cámaras de Senadores y Diputados.

Voy a poner énfasis en los siguientes preceptos constitucionales: Inciso A).- La fracción VIII del Apartado A, del artículo 2º constitucional, que prevé el derecho de los pueblos y comunidades a elegir en los Municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. B).- Las fracciones I, VI y IX del Apartado B, del artículo 2 constitucional que establecen la obligación de la Federación, Estados y Municipios de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar las prácticas discriminatorias, así como de diseñar instituciones y políticas públicas para garantizar la vigencia de los derechos indígenas y su desarrollo integral.

En específico, estas fracciones prevén respectivamente la obligación de impulsar el desarrollo regional, y en el caso de los Municipios de asignar partidas presupuestales, que serán

administradas directamente por las comunidades; la obligación de establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, –a lo que ya se refirió don Sergio Salvador, hace un momento– y la obligación de consultar a los pueblos indígenas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los estatales y los municipales, y en su caso, de incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

El último párrafo de la fracción III, del artículo 115 constitucional que prevé, que las economías indígenas podrán dentro del ámbito municipal asociarse en los términos imperfectos previstos en la ley; el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas constitucionales, que dispone: "Que para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, deberán tomarse en consideración la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política".

Para poner en contexto estos artículos, debemos tomar en cuenta los documentos del proceso de reforma constitucional. En la exposición de motivos, se señaló que el reconocimiento de las comunidades indígenas no debía entenderse como la creación de un nuevo nivel de gobierno y que los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes deben ser complementarios con los vigentes; es de gran importancia el dictamen de la Cámara de Diputados que actuó como "Cámara revisora"; en él se habla del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, y se asentó: Tal reconocimiento solo puede darse dentro del orden establecido por la Constitución, con respeto a las formas políticas vigentes, en especial el Municipio Libre; el Municipio Libre es una institución flexible cuya organización permite una amplia gama de variantes. La expresión "política natural de las comunidades" se da en los municipios. Los ayuntamientos están al alcance de las poblaciones indígenas para ser integrados con su

representación; en ellos pueden aquéllas actuar de acuerdo con sus usos y costumbres, que adquieren pleno reconocimiento constitucional y legal; dentro del marco del Municipio Libre y de acuerdo con los ordenamientos estatales, las comunidades son grupos con órdenes jurídicos y órganos propios que crean y aplican aquél de acuerdo con sus usos y costumbres; se reconoce y garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas. La toma de las decisiones que el concepto necesariamente implica, se precisa jurídicamente como la autonomía para gozar y ejercer una serie de derechos específicos que se establecen en el Apartado A, del artículo 2, que se propone. La autonomía queda así entendida dentro de la unidad de la Nación y acorde con el orden constitucional vigente respecto al cual no establece excepción alguna. Los derechos que forman el contenido de tal autonomía son: derecho de participación política, por una parte, las comunidades alcanzan su reconocimiento como personas de interés público, dentro del marco del Municipio Libre y pueden elegir, de acuerdo con su derecho tradicional, sus formas propias de gobierno, así como los representantes para su ejercicio. Por otra parte, adquieren un derecho de representación frente a las autoridades municipales; ejercido éste también conforme a su derecho tradicional que podrá darse, básicamente, en los municipios en que la población no alcance la mayoría. Los derechos que establece el artículo se refuerzan con una obligación específica del Estado mexicano a través de sus órganos; sean federales, estatales y municipales de cumplir acciones concretas para abatir carencias y rezagos, y luego agrega algo muy importante: No son simples imperativos programáticos, sino obligaciones específicas. Estas acciones obligatorias constituyen una nueva figura dentro del orden jurídico mexicano, aunque dependen de las disponibilidades presupuestales; las limitaciones de éstas no pueden condicionar su obligatoriedad, sino solo su monto que tendrá que determinarse en cada caso. Hasta aquí el dictamen.

Para mí es claro que estos preceptos constitucionales instituyen una relación especial y cercana en el Municipio y los pueblos y comunidades indígenas, pues a través de estas normas se les da participación política en los órganos del gobierno del Estado mexicano; en específico en los Municipios y en los Congresos federal y locales; cuestión a la que debemos darle un peso específico y reconocerles el interés legítimo para defender los derechos constitucionales de los pueblos y comunidades indígenas, pues me parecería absurdo que la participación de los indígenas, en los órganos de gobierno, no pueda ser en defensa de sus derechos consagrados en nuestra Constitución. El interés legítimo con que cuenta el Municipio para promover la presente controversia no deviene solo del hecho de que en su territorio habiten comunidades indígenas, sino porque la relación constitucionalmente tutelada, entre los pueblos y comunidades indígenas y los Municipios, tiene como finalidad la protección de los derechos de aquéllas.

Finalmente, no coincido con lo sostenido en el proyecto en cuanto afirma, que la comunidad indígena pueda recurrir al amparo, pues se trata de una omisión y el amparo no procede contra omisiones legislativas absolutas, debido a los efectos relativos de la sentencia.

Me parece que estamos parados en un terreno muy delicado. Ya dijimos que la acción de inconstitucionalidad es improcedente en contra de omisiones legislativas, que no es la vía para solucionar el olvido de más de seis años de Legislador federal, de cumplir con la obligación que le impone la fracción VI del Apartado B, de establecer mediante ley, condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. Ahora, cuando hemos sostenido que la controversia constitucional es procedente en contra de omisiones legislativas absolutas, les diremos que los municipios carecen de

interés legítimo para defender los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Cuando se acuda al amparo, diremos que no existe interés jurídico, pues se acude en defensa de un interés difuso, o que el amparo es improcedente contra omisiones legislativas. Creo que debemos tener mucho cuidado, puesto que esta Suprema Corte de Justicia, es la única que puede hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 2° constitucional, sobre todo aquellos que requieren acciones legislativas para concretarse. Si la jurisdicción constitucional falla, se cierran las puertas de las vías institucionales, y el conflicto buscará otros cauces, pues la promesa de reconciliación que la reforma constitucional significaba, habrá sido defraudada; por ello, me parece indispensable el reconocimiento del interés legítimo de los municipios para defender los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muy importante documento del señor ministro Góngora. Ya estamos fuera de término señor ministro Aguirre Anguiano, muy brevemente.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Muy brevemente, gracias señor presidente. Tan breve, como para decir en qué estoy de acuerdo con el ministro Góngora y en qué no. Para mí el inciso b) del artículo 2° de la Constitución, que establece: La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones, y determinarán, etc. Por la brevedad no se los leo todo, para mí, esto le da legitimación al Municipio, para plantear esta controversia constitucional, y más que todo si se hace la interpretación del sistema, conforme al último párrafo de la fracción III del 115 constitucional. Esto es un sistema, y en eso estoy de acuerdo. En lo que estoy en total desacuerdo, es que la defensa de las desigualdades de los indígenas, haya

empezado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o cuando menos el grupo así denominado. Yo creo que empezó antes, con Isabel la Católica por ejemplo, y se continuó por todos los franciscanos, Motolinia, de Zumárraga, de Sahagún, etc. Entonces, para mí y parafraseando al ministro Góngora Pimentel, estaríamos pisando un terreno muy falso, si hablamos que la defensa de los indígenas, nació con este grupo, que para mí es ideológico, y parte del folklore nacional, cuyos líderes se dedican a pasearse como Pedro por su casa en toda la República, y hace trece años que le declaró la guerra al Ejército Mexicano, y no disparan un tiro. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señores ministros, les recuerdo que ayer quedó aplazada la controversia constitucional que nos listó el señor ministro Gudiño, la número 95/2004, y acordamos reanudarla el jueves. Sin embargo, estamos ya a mitad de esta discusión, aceptamos el impedimento del señor ministro Cossío, les pido muy atentamente que cambiemos nuestro acuerdo, que sigamos con la discusión de estos asuntos con los que se dio cuenta hoy, hasta terminar con ellos, y hasta después reanudemos la controversia 95.

Levanto la sesión pública, y los convoco en este mismo lugar para la privada en quince minutos más.

(TERMINÓ LA SESIÓN A LAS 13:30 HORAS.)